

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por el Lic. Rafael Pescador, en representacion del C. Fernando Flores, contra un auto dictado por el juez del ramo civil de la capital de ese Estado.*

### PRELIMINARIO FISCAL.

Ciudadano juez de Distrito.

El ciudadano jefe superior de hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que de los recados que obran en calidad de pruebas, no resulta ninguna por la cual se venga en conocimiento de que no hayan sido competentes los tribunales que sentenciaron á D. Juan Fernando Flores, al pago de la libranza de dos mil quinientos pesos, sus réditos y costas procesales. Siendo pues competentes los tribunales que pronunciaron la sentencia y habiendo aplicado exactamente las leyes en que la apoyaron, el fiscal reproduce los fundamentos de su dictámen de 11 de Octubre de 1873, sobre lo principal, el cual corre á fojas 17; y dándole aquí por inserto, concluye como entónces, pidiendo se deseché la solicitud de amparo interpuesta por el Sr. D. Juan Fernando Flores, y se le aplique la pena que corresponde conforme á la ley de 20 de Enero de 1869.—*Juan Nájera*—Una rúbrica.

«Ciudadano juez de Distrito:

El jefe de hacienda en representacion de la voz fiscal dice: que el quejoso pide amparo contra el auto de ejecucion, librado por el ciudadano juez de lo civil en cumplimiento de la sentencia del supremo tribunal de justicia del Estado: expone haberse violado en su persona las garantías que otorgan los arts. 14 y 16 de la Constitucion general de la República. El art. 14 manda, que nadie sea juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él por

el tribunal que previamente haya establecido la ley. El art. 16 dispone: que nadie sea molestado en su persona, familia, domicilio y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de sus procedimientos. En el caso que nos ocupa, el quejoso no ha sido juzgado por leyes posteriores al hecho, segun se vé por los fundamentos de las sentencias respectivas, todas las cuales se apoyan en las Ordenanzas de Bilbao, Curia Filípica, Febrero Mexicano etc., ni ha sido molestado en sus posesiones, sino precisamente en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, como lo es el juzgado de lo civil, quien funda suficientemente la causa legal de su procedimiento en la superior sentencia del tribunal de justicia del Estado. La ley de amparo, ha sido expedida precisamente con el objeto de sostener las garantías que á todo ciudadano otorga la carta fundamental de la República; pero ninguna de esas garantías consiste en burlar los fallos de los tribunales competentes, fundados en las leyes respectivas y en las reglas generales del derecho. Por lo expuesto, el fiscal que suscribe, opina que no hay motivo para decretar el amparo que se solicita, y debe en consecuencia condenarse al promovente á sufrir la multa de cien pesos, segun el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869. Pido por tanto al juzgado, se suya pronunciar su fallo en el sentido expresado.

Durango, Octubre 11 de 1873.—*Juan Nájera*.—Una rúbrica.

Es copia que certifico. Durango, Agosto 17 de 1874.—*Juan Nájera*.

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Durango, Agosto 17 de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Lic. Rafael Pescador, en representacion del C. Juan Fernando Flores, contra una ejecutoria de la 2ª Sala del

Tribunal de Justicia del Estado que lo condenó á pagar la cantidad de 2,500 pesos valor de una aceptación, y además el rédito correspondiente de medio por ciento mensual. Visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado, con las constancias que acompañó á dicho informe. Teniendo en cuenta lo pedido por el ministerio fiscal, con lo demás que de autos aparece:

Considerando: que de los datos que suministra este expediente, consta que D. Celestino Bengoechea, tenedor de la letra en cuestion, se presentó en 12 de Noviembre de 1868, demandando á D. Juan Fernando Flores por el pago de dicha letra, con mas el rédito del uno y medio por ciento mensual:

Que requerido D. Juan Fernando Flores para que reconociera la firma con que está cubierto dicho libramiento, se negó á hacerlo, manifestando que abrigaba una positiva duda de si era ó no suya la firma que se le presentaba.

Que seguidos los trámites respectivos de un juicio ordinario, en vez de ejecutivo, fué condenado D. Juan Fernando Flores á pagar la suma que se le reclamaba, con mas el uno y medio por ciento mensual.

Que como era natural, el quejoso apeló de dicha sentencia, y pasó en grado al conocimiento de la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado:

Que sustanciados los trámites de estilo en esta segunda instancia, fué condenado de la misma manera D. Juan Fernando Flores en definitiva, á pagar el valor de la letra en cuestion, modificando dicha sentencia la de 1ª instancia, en cuanto al pago de réditos, y determinando que en vez del uno y medio por ciento mensual que se le reclamaba, fuera tan solo el medio por ciento el que debía exigirse.

Que habiendo interpuesto el recurso de súplica de esta nuevas sentencia, pasó el negocio á la 2ª Sala del mismo tribunal de Justicia del Estado.

Que llenados los trámites que las leyes demarcan para las terceras instancias, D. Juan Fernando Flores fué condenado igualmente al pago de la suma que se le reclamaba.

Que en consecuencia, hay en este negocio tres sentencias pronunciadas por distintos jueces, y que sin embargo están constantes y concordantes en cuanto á lo sustancial del hecho, produciendo en el caso una verdadera certidumbre legal indestructible.

Que por las constancias que el mismo quejoso ha presentado, no aparece en manera alguna la violacion de la garantía de que se hizo mención al entablar el presente recurso; pues al contrario, se deja ver que seguidos con escrupulosidad todos los trámites de estilo, se hizo una exacta y determinada aplicacion de las leyes correspondientes al caso.

Que los diversos jueces que han conocido del negocio, habrán podido equivocarse en la apreciacion de las diversas pruebas que en él se han aducido; pero esta circunstancia no es de la incumbencia de la autoridad federal, la cual solo debe ocuparse de investigar si ha habido ó no violacion de la garantía que se reclama.

Que en cuanto al mandamiento de embargo dictado por el C. juez del ramo civil de esta ciudad, este fué por vía de apremio, y segun la prescripcion contenida en el art. 1,655 del Código de procedimientos civiles, y que por lo mismo, ese acto jurisdiccional no importa violacion alguna de garantías individuales.

Por tales consideraciones se decreta:

1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Juan Fernando Flores contra la ejecutoria de la 2ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, por la que fué condenado á pagar la suma de 2,500 pesos valor de una aceptación, con mas el rédito de medio por ciento mensual, ni contra el subsiguiente mandamiento de embargo dictado por el C. juez del ramo civil, por vía de apremio, y en cumplimiento de aque-

lla ejecutoria. 2º Que conforme á lo prevenido en el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se imponga á D. Juan Fernando Flores una multa de 100 pesos. 3º Remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision y sáquense las copias correspondientes para la redaccion del Semanario Judicial.

Y por este auto juzgando en definitiva, así lo proveyó y firmó el C. juez de Distrito, Lic. Gerónimo Sida, por ante mí. Doy fe:—*Gerónimo Sida.*—Una rúbrica.—*Juan B. Arrellano*, secretario.—Una rúbrica.

Es copia que certifico, para remitir al Semanario Judicial. Durango, Agosto 25 de 1874.—*Juan B. Arrellano*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Diciembre 1º de 1874.

Visto el recurso de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Durango, por el Lic. Rafael Pescador, en representacion del C. Fernando Flores, contra el auto dictado por el juez del ramo civil de la capital del Estado, mandando llevar á ejecucion la sentencia definitiva pronunciada por la 2ª sala del Tribunal Superior de Justicia del mismo Estado, que condenó á su poderdante á pagar la cantidad de dos mil quinientos pesos valor representativo de una libranza en que aparecia como aceptante, manifestando que con tal resolucion se han violado las garantías que consignan los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal.

Visto el auto del acto reclamado; el informe de la autoridad; el parecer fiscal; el fallo del inferior, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus mismos y legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 17 de Agosto del presente año, que declara:

Primero: que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Juan Fernandez Flores contra la ejecutoria de la 2ª sala del

Tribunal Superior del Estado, por la que fue condenado á pagar la suma de dos mil quinientos pesos valor de una aceptacion, con mas el rédito de un medio por ciento mensual, ni contra el subsiguiente mandamiento de embargo, dictado por el juez del ramo civil por vía de apremio y en cumplimiento de aquella ejecutoria. Segundo: que conforme á lo prevenido en el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se impone á D. Juan Fernando Flores una multa de cien pesos.

Se extraña al Juez de Distrito por haber decretado la suspension del acto reclamado, sin haber motivo suficiente para ello.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio Rumírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Diciembre 20 de 1874.—*Luis M. Aguilar.*